

0038/2024

La consulta plantea la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD en lo sucesivo), y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD en lo sucesivo), del modelo normalizado de Convenio entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las Comunidades Autónomas -con Acuerdo de Adhesión de las Entidades Locales- para la implantación y difusión del nuevo Sistema de Gestión de Información de Servicios Sociales (**SEGISS**) y el intercambio de información (SIESS).

Según expone el órgano consultante, el Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales (SIUSS) -actualmente vigente- gestionado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, resulta insuficiente para dar un servicio ágil a los profesionales e incorporar nuevas funcionalidades que se consideran imprescindibles para una gestión de calidad y para la obtención de datos fiables. En consecuencia, para responder mejor a las necesidades existentes, se pretende, de una parte, la implantación del nuevo Sistema SEGISS, que reemplazará a SIUSS como aplicación informática y, de otra parte, la creación de un Sistema de Información Estatal de los Servicios Sociales (SIESS), para la explotación estadística de la información._

En el entorno **SEGISS**, como nuevo aplicativo que sustituye a SIUSS, se tratarán, evaluarán y analizarán los datos personales relativos a los usuarios de los servicios sociales prestados por profesionales en el ámbito de cada Comunidad Autónoma.

I

Con carácter previo es preciso mencionar que este Gabinete Jurídico se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la adecuación **del modelo anterior de Convenio SIUSS**, y de su prórroga -formalizada como Adenda-, al marco jurídico de protección de datos personales, siendo los más recientes, los

informes de 18 de julio de 2024 (Informe 35/2024), y de 14 de diciembre de 2020 (Informe 82/2020), en los que se adoptaban las siguientes conclusiones:
(...)

Por tanto, habida cuenta de las competencias sobre servicios sociales que ostentan las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos de Autonomía, en lo relativo a los tratamientos de datos personales que requieran la prestación de dichos servicios, las mismas ostentarán la condición de responsables del tratamiento, siendo las que determinan, en su ámbito competencial, los fines y medios del tratamiento, por lo que las mismas ostentan la condición de responsable del tratamiento pudiendo suscribir, a estos efectos, el modelo de convenio remitido, cuyo objeto es, precisamente, la difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática y el intercambio de información, mediante utilización del programa informático, en entorno Web, dentro del ámbito de la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales de su territorio, por lo que se trata de una decisión directa adoptada sobre los medios del tratamiento, actuando el Ministerio como encargado del tratamiento, en los términos que deben recogerse en el convenio de acuerdo con el artículo 28.3 del RGPD.

Habida cuenta la definición de responsable del tratamiento en el RGPD, dicha condición la ostentan en virtud de la competencia que les atribuye el ordenamiento jurídico, incluso en el supuesto en que no tratan directamente los datos personales, ya que lo esencial es su capacidad para decidir los fines y los medios, recordando las Directrices 7/2020 del CEPD que, teniendo dicha capacidad de influencia, no es necesario que el responsable del tratamiento tenga realmente acceso a los datos que se están procesando” (apartado 42).

Por lo tanto, las CCAA tienen la condición de responsable del tratamiento de los datos personales que sean necesarios para la prestación de los servicios sociales que son competencia de las mismas, asumiendo la obligación de difusión e implantación de SIUSS en las Corporaciones Locales de su territorio, sin especificarse en el convenio la forma en la que las CCAA garantizan dicha implantación, si bien se deduce que la misma será potestativa para las entidades locales, al contemplar el propio convenio la existencia de Unidades de Trabajo Social que no utilicen SIUSS como herramienta de gestión para los servicios sociales comunitarios municipales.

Por consiguiente, la implantación en las Corporaciones Locales podrá realizarse a través de los correspondientes acuerdos administrativos, bien mediante la adhesión de las mismas al presente convenio, bien mediante la firma de un convenio específico con su CCAA. En todo caso, las entidades locales mantienen su competencia respecto de los servicios sociales que hayan asumido en los términos anteriormente señalados, decidiendo sobre los fines y los medios, por lo que ostentarán igualmente la condición de responsable respecto de los tratamientos de datos personales necesarios para la prestación de los servicios sociales que son de su competencia, tal y como se indica por la Abogacía del Estado consultante, circunstancia que deberá figurar en el correspondiente instrumento administrativo.

III

Por todo ello, tanto las CCAA como las Corporaciones Locales ostentan, en el ámbito de sus respectivas competencias, la condición de responsable del tratamiento, entendiendo esta Agencia que el modelo planteado, en cuanto que son las CCAA las que suscribe el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que actúa como encargado del tratamiento, es adecuado, al objeto de determinar en dichos convenios las condiciones a las que deberá ajustarse el correspondiente encargo, en las que deberá observarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD, y siendo las comunidades autónomas las que difundirán e implantarán SIUSS entre las entidades locales de su territorio, las cuales ostentarán la condición de responsable respecto a sus propios tratamientos de datos, asumiendo las condiciones del encargo que se han establecido entre la CCAA y el Ministerio en virtud del correspondiente instrumento jurídico.

No obstante, como bien se indica por la consultante, el texto del convenio omite cualquier referencia a la posición jurídica que corresponde a las entidades locales que implanten SIUSS como aplicación informática, debiendo modificarse el mismo al objeto de recoger que las mismas tendrán la condición de responsables del tratamiento, siendo conveniente que en el propio texto se recogiera también la forma en que se procedería a dicha implantación.

De este modo, quedaría clarificada la posición de las partes intervinientes en los tratamientos de datos personales, haciendo constar la condición de las comunidades autónomas y las entidades locales que implanten el sistema como responsables del tratamiento y el ministerio como encargado, de acuerdo con lo previsto en el RGPD.

Pues bien, según se aprecia, dichas observaciones han sido tenidas en cuenta por el órgano consultante en el modelo normalizado de Convenio que ahora se presenta a informe, de tal suerte que en dicho modelo se distingue claramente el papel de cada una de las Administraciones públicas intervinientes, estableciéndose *claramente el papel de la Entidades Locales como “responsables de los tratamientos”*.

De tal suerte, de acuerdo con las competencias atribuidas a cada Administración actuante por el ordenamiento jurídico, se distingue claramente la concurrencia de diversos responsables de los tratamientos, correspondiendo dicha condición tanto a las Comunidades Autónomas participantes en el sistema, como a las Entidades Locales que, en virtud de los correspondientes acuerdos de adhesión, se incorporen a dicho sistema.

Por su parte, el Ministerio consultante, además de “facilitador” del sistema, asumirá la condición de Encargado de los tratamientos en los estrictos términos descritos en el propio convenio, y con el debido cumplimiento de las

obligaciones que en relación con dicha figura establecen especialmente los **artículos 28** del RGPD y 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Lo anterior debe ponerse en relación con lo dispuesto en el **artículo 6.1.e)** del Reglamento General de Protección de Datos, a los efectos de establecer el modo en el que el rol asignado a cada uno de los intervinientes, se encuentra en íntima conexión con la base de legitimación del tratamiento de los datos personales por parte del responsable, que, en el presente supuesto, no es único, encontrándonos ante un supuesto de corresponsabilidad de los tratamientos, del **artículo 26 del Reglamento General de Protección de Datos** (responsables de los tratamientos serán tanto las Comunidades Autónomas como los Entes Locales que se adhieran al Convenio, en consideración a que unos y otros tienen conferidas diversas competencias sobre el tratamiento de datos de carácter personal en el ámbito de los servicios sociales).

A dichos efectos, en la actuación coordinada de ambos tipos de responsable de los tratamientos, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto el artículo 26 **-Corresponsables del tratamiento-** del RGPD, a saber:

- “1. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información a que se refieren los artículos 13 y 14, salvo, y en la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.*
- 2. El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.*
- 3. Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.”*

Por otra parte, resulta claro que, con independencia de facilitar el uso del aplicativo por parte de Comunidades autónomas y Entes Locales, el papel del Ministerio consultante es el de un “Encargado del Tratamiento” (ex art. 28 RGPD), que deberá ceñir su actuación y el empleo de los datos personales objeto de encargo a lo dispuesto en la normativa aplicable y al clausulado específico del Anexo I del Convenio -Instrucciones del Encargado del Tratamiento-.

II

Como se ha indicado, en esta ocasión se plantea la sustitución del antiguo modelo normalizado de Convenio SIUSS, por el que ahora se presenta a informe, SEGISS, cuya copia se adjunta a la presente consulta.

Pues bien, en primer lugar, tal y como advierte en su informe previo el Delegado de Protección de Datos de la consultante, se observan ciertos defectos formales -erratas- cuya corrección se impone en aras de la claridad y conformidad al ordenamiento del texto del Convenio y de cualquier cuestión interpretativa que pudiere producirse como consecuencia de su aplicación. Así, la mención al derogado artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o la mención a la debida inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (página 3 del Convenio), deberían ser suprimidas en el modelo normalizado definitivo de cuya implantación se trata.

No obstante lo anterior, según se adelantó, en lo que se refiere a la consideración de las figuras de Responsable del Tratamiento (cláusula TERCERA del Convenio) y Encargado del tratamiento (cláusula CUARTA del Convenio), se observa una regulación adecuada y conforme con la normativa aplicable en materia de protección de datos.

A este respecto, como punto de partida, debemos acudir a lo indicado en el Considerando 79 del RGPD que señala que *“La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable”*.

El RGPD recoge la necesidad de establecer claramente el mapa de intervinientes en todo tratamiento de datos. Esta regulación pretende que no queden supuestos de actuación fuera de su ámbito de aplicación, con el fin de dotar a las autoridades de supervisión de los elementos necesarios para desarrollar su función y en definitiva para brindar a los interesados a quienes se aplica el RGPD la protección de sus datos de carácter personal que establece la norma. Por tanto, cualquier actividad que conlleve el tratamiento de datos personales será atribuible a algún sujeto que cumpla los requisitos de las distintas categorías que ofrece el RGPD.

El RGPD define en su artículo 4.7 la figura del responsable del tratamiento o responsable como *“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y*

medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.” Y en su artículo 4.8) define la figura del encargado del tratamiento o encargado como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

No obstante lo anterior, y adicionalmente a su condición de Encargado del Tratamiento, la creación del Sistema de Información Estatal de los Servicios Sociales (SIESS) para la **explotación estadística de la información** (que recogerá y aglutinará la información disponible en los distintos sistemas de información sobre servicios sociales, independientemente de que usen o no SIUSS o SEGISS, para el intercambio de información), supone que en dichos supuestos, el Ministerio consultante **deba ser considerado Responsable del Tratamiento**.

Así, para esta tarea, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del Convenio, el órgano consultante utilizará la información recibida a efectos exclusivamente estadísticos, explotando los datos mediante descargas de estos, adaptándose en su actuación a la nueva aplicación SIESS que sustituye a SIUSS Web de Explotación de Datos. Dicha información se referirá a la disponible en la Comunidad Autónoma correspondiente, tanto de las Unidades de Trabajo Social que no utilicen SEGISS, como de las que no utilizaran anteriormente SIUSS como herramienta de gestión para los servicios sociales comunitarios municipales.

En consecuencia, para la realización de estadísticas, de acuerdo con la normativa de protección de datos, y con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, el Ministerio asumirá una doble condición: como encargado del tratamiento, pero también como responsable del tratamiento para estas finalidades estadísticas.

Esta doble condición se justifica en la medida en que el Ministerio, en virtud de sus competencias legales, no solo se limita a tratar datos personales por cuenta de otros responsables (como las CCAA o las Entidades Locales), sino que también puede determinar los fines y los medios del tratamiento de datos personales en el ámbito de la realización de estadísticas oficiales. Dichas actividades se enmarcan dentro de las funciones públicas que le han sido conferidas por la ley, particularmente en lo que respecta a la recopilación y el análisis de datos que son esenciales para la formulación de políticas públicas y la planificación social.

En el artículo 4 de la Ley de la Función Estadística Pública se establecen los principios por los que se regirá la actividad estadística, coincidiendo con los

principios aplicables a la normativa de protección de datos. Asimismo, el artículo 89 del RGPD permite el tratamiento de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica, **o fines estadísticos**, siempre que se adopten las garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado.

En cuanto a la normativa específica de la LOPDGDD, su artículo 25 regula el tratamiento de datos para fines estadísticos, proporcionando un marco legal que permite tales tratamientos siempre que se cumpla con las garantías adecuadas, como la seudonimización o la anonimización de los datos.

Por tanto, en el contexto de sus competencias estadísticas, el Ministerio consultante asume la responsabilidad de garantizar, en el tratamiento de los datos personales para dicha finalidad, y como responsable del tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones específicas relacionadas con la protección de datos, tales como la minimización de datos, la anonimización o seudonimización de los datos, y la implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los derechos de los interesados. De este modo, se asegura que los datos tratados para estos fines se utilicen de manera compatible con los objetivos originales de recopilación, respetando siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En resumen, en lo relativo a actividades estadísticas, el Ministerio consultante no actúa como encargado del tratamiento de los datos proporcionados por las CCAA y Entidades Locales, sino que ha de ser considerado como responsable del tratamiento en lo que concierne a sus competencias. **Esta condición dual requiere una gestión rigurosa y diferenciada de los datos, asegurando que cada función se desempeñe conforme a las disposiciones legales aplicables y a los principios en materia de protección de datos en este caso concreto conforme a los principios y normas que se establecen en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, especialmente en lo relativo al secreto estadístico (véase por ejemplo, arts. 4.7 y 13 de la Ley 12/1989), que guían el uso de la información personal.** En su virtud, se sugiere que en el convenio quede adecuadamente plasmada la condición del Ministerio consultante como responsable para estas finalidades.

Por otra parte, idénticas consideraciones acerca de su debida adecuación a la normativa de protección de datos, se extraen del análisis de la cláusula OCTAVA del Convenio, sobre “Formación del personal que trata la información”, en la que se prevé que *“El encargado y el responsable deberán informar y formar al personal que trate la información sobre las obligaciones y prohibiciones que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y, en*

especial, con lo dispuesto en el artículo 5.2 sobre su deber de secreto profesional”.

III

Por otra parte, en la cláusula SEGUNDA del Convenio que se informa, se dispone que:

*“La Comunidad Autónoma dese compromete a la difusión e implantación de SEGISS, en sustitución de SIUSS en las Corporaciones Locales de su territorio, dando acceso al programa informático SEGISS, en sustitución de SIUSS Web a aquellas que se adhieran a este Convenio y suscriban el Acuerdo de Adhesión que se acompaña como anexo 2, y siempre que garanticen que **llevarán un Registro de Actividades de Tratamiento**, en cumplimiento del Reglamento 2016/679 de la UE relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 6 datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (...)”*

Pues bien, en relación con dicha previsión, que afecta a los Entes Locales que se adhieran al Convenio (en condición de “responsables de los tratamientos”), se sugiere que en el texto se mencione que dichas entidades locales *“garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, y específicamente que llevarán un Registro de Actividades de Tratamiento (...) esto es, que se establezca en el convenio la necesaria observancia del cumplimiento del conjunto de las obligaciones dimanantes de la normativa de protección de datos (básicamente, RGPD y LOPDGGD), y no únicamente, de manera aislada, la mención a la llevanza del “Registro de Actividades de Tratamiento”, que no es sino una, entre otras, de las obligaciones que corresponde al responsable.*

Por otra parte, en el Convenio que se pretende implantar, se indica en el apartado 2 del Anexo I -Instrucciones del Encargado del Tratamiento-, bajo la rúbrica “Identificación de los Datos Personales afectados/tratados”, que en el entorno SEGISS se tratan, evalúan y analizan los datos relativos a usuarios de los servicios sociales prestados por profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Pues bien, **dicha mención resulta insuficiente** por cuanto se desconoce a qué información (a qué tipo de datos) en concreto se refiere la cláusula, y el nivel de concreción de esta información/datos. Es decir, no es lo mismo tratar únicamente información identificativa de carácter general, que, por ejemplo, los servicios demandados y prestados en relación con un usuario concreto -que probablemente en el caso informado podría incluir datos de

categorías sensibles (por ejemplo, datos de salud, discapacidad etc.)-. Este aspecto resulta esencial para determinar, y que los interesados puedan conocer, la categoría o tipo de datos que están siendo objeto de tratamiento. Y todo ello con independencia de que, como se obliga el Encargado, éste no acceda a datos personales contenidos en SEGISS, pues dicha consideración es irrelevante a los efectos de que se produzca materialmente el tratamiento, y, por tanto, el hecho al que esta llamado regular el RGPD y la LOPDGDD.

Por lo tanto, se sugiere que se concreten estos aspectos de los datos objeto del tratamiento en el texto del convenio, es decir, qué datos se tratan en el entorno SEGISS, y la norma que autoriza/prevé dicho tratamiento.

IV

Y en relación con lo anterior, debe indicarse que el objeto del convenio es, en síntesis, el tratamiento de información de ciudadanos usuarios de los servicios sociales que se prestan en las distintas Comunidades Autónomas directamente o a través de las Entidades Locales.

En este sentido debe indicarse que, tal como consta en la página web del Ministerio, <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/servicios-sociales/index.htm>, *“Los servicios sociales son los servicios de intervención social profesional que las administraciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía para responder a situaciones de especial necesidad. El objetivo es evitar que las personas se enfrenten a barreras tales que les impidan el ejercicio de sus derechos o el disfrute de una vida plena en la comunidad, evitando o reduciendo situaciones de exclusión social o desprotección. Dentro de los servicios sociales se encuentran, por ejemplo, la atención a la dependencia de las personas mayores o con discapacidad, la protección familiar y el cuidado de la infancia que crece alejada de su familia, el acompañamiento en situaciones críticas como la violencia de género, el sinhogarismo, las adicciones o la pérdida de ingresos”*. En consecuencia, se deduce claramente que la información que va a ser objeto de tratamiento por el SEGISS puede contener, como ya se ha expuesto, categorías especiales de datos previstas en el artículo 9 del RGPD.

Dicho art. 9 contempla como de categoría especial aquellos datos que *revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física*, y prohíbe su tratamiento, salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en su apartado 2.

Pues bien, al margen de la posible concurrencia de alguna de las circunstancias que levantan la prohibición del tratamiento (artículo 9.2 RGPD) y de que la determinación de la base jurídica de dicho tratamiento (artículo 6 RGPD) debe ser apreciada por el responsable del mismo, debe tenerse en cuenta que al someter a tratamiento categorías especiales de datos, las obligaciones de responsables, y encargados y en definitiva la aplicación del principio de responsabilidad proactiva, se imponen con mayor intensidad.

Esto se traduce, entre otras medidas, en la realización de un análisis de riesgos teniendo en cuenta estas circunstancias (concurrencia de datos especialmente protegidos), en la adopción de medidas de seguridad adecuadas (artículos 24 y 32, ambos del RGPD), y, en todo caso, en la realización de una **evaluación de impacto** (artículo 35 RGPD).

En consecuencia, se estima adecuado que conste en el texto del convenio que el responsable del tratamiento realizará una Evaluación de Impacto con carácter previo a llevar a cabo el tratamiento de datos personales que puede derivarse del Convenio.

V

Por último, según se observa, nada consta en el Convenio sobre la adecuación del **SEGISS** al Esquema Nacional de Seguridad regulado Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, y previsto en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el artículo 3 del citado Real Decreto, bajo la rúbrica “Sistemas de información que trate datos personales”, se señala lo siguiente:

1. Cuando un sistema de información trate datos personales le será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o, en su caso, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, el resto de normativa de aplicación, así como los criterios que se establezcan por la Agencia Española de Protección de Datos o en su ámbito competencial, por las autoridades autonómicas de protección de datos, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente real decreto.

2. En estos supuestos, el responsable o el encargado del tratamiento, asesorado por el delegado de protección de datos, realizarán un análisis de riesgos conforme al artículo 24 del Reglamento General de Protección de

Datos y, en los supuestos de su artículo 35, una evaluación de impacto en la protección de datos.

3. En todo caso, prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto a los que se refiere el apartado anterior, en caso de resultar agravadas respecto de las previstas en el presente real decreto.

Dicho lo anterior, debe recordarse, que, tal y como viene señalando de manera reiterada esta Agencia, existen diferencias importantes entre la seguridad de la información y la protección de datos de carácter personal, (por todos, Informe 64/2021 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad), de modo que la seguridad de la información aparece como una obligación más de los responsables y encargados del tratamiento, quienes deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo para los derechos y libertades de los interesados, pero sin que se limite exclusivamente al ámbito de la seguridad de dicha información, en cuanto que la protección de datos personales tiene un ámbito mucho más extenso que abarca, a un conjunto de principios, derechos, medidas y garantías mucho más amplio, entre ellas medidas sobre el concepto del tratamiento, políticas de protección de datos, protección de datos desde el diseño y por defecto o notificación y comunicación de brechas de datos personales, bajo la garantía administrativa de las “autoridades de control” previstas en dicha normativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, resultaría adecuado que en el Convenio se hiciera referencia al cumplimiento del ENS y las obligaciones que se asumen por parte de responsables y encargados del tratamiento. Debiendo hacerse referencia también, a los tratamientos de datos personales que puedan realizarse como consecuencia de la implantación de medidas de seguridad que tengan un objetivo distinto que la protección de datos personales, cuestión que fue igualmente objeto de análisis en nuestro informe 64/2021.

VI

Al margen de las consideraciones realizadas, y con la observancia por parte del consultante de las sugerencias realizadas, se informa favorablemente el modelo normalizado de “CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE, CON ACUERDO DE ADHESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, PARA LA DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DEL APLICATIVO SEGISS, EN SUSTITUCIÓN DE SIUSS Y PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN SIESS”.